



MODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ARCHIVO

33126/2018 NOTIFICADOR DE LA DELEGACIÓN TLALPAN  
MARGARITO CRUZ JUÁREZ (AUTORIDAD RESPONSABLE)

33127/2018 TANIA SÁNCHEZ GUZMÁN, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (AUTORIDAD RESPONSABLE)

33128/2018 DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE GOBIERNO EN TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)

33129/2018 MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO A ESTE JUZGADO (MINISTERIO PÚBLICO)

Stamp: DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO, DIRECCIÓN JURÍDICA, Tlalpan, Un camino seguro. Date: 20 AGO 2018. Hora: 13:50.

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO PRINCIPAL RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 1674/2016, PROMOVIDO POR [REDACTED] CON ESTA FECHA SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE A LA

LETRA DICE:

Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.

Agréguase a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito al Decimonovento Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que acompaña cinco copias del testimonio de la resolución dictada en el toca RA-563/2017, los autos originales del juicio de amparo 1674/2016, del índice de este órgano jurisdiccional; al respecto, acútese recibo, y hágase del conocimiento de las partes que la citada Superioridad, mediante resolución de tres de agosto de dos mil dieciocho, determinó lo siguiente:

- PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida.
  - SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por [REDACTED]
  - TERCERO. Se declara SIN MATERIA la revisión adhesiva.
- Notifíquese,...

En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glosese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales a la superioridad, el cual se integra por ciento noventa y dos fojas hasta su certificación, y tomando en consideración que se trata de una reproducción de las actuaciones que obran en el juicio principal, se determina que las mismas son susceptibles de destrucción, de ahí que únicamente se glosan las constancias respectivas a partir de la foja ciento noventa y tres, al ser actuaciones originales; y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo glosar en la parte final el cuaderno original del incidente de suspensión de los actos reclamados, y el cuaderno duplicado del mismo.

En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo cuatro del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente será susceptible de destrucción y el original del incidente de suspensión relativo, será susceptible de depuración, y sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, la resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva.

Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el original del incidente de suspensión en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse en su oportunidad al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos procedentes.

Stamp: Jefatura Delegacional en Tlalpan, Dirección General Jurídica y de Gobierno, Dirección Jurídica, Ciudad de México, 20 AGO 2018. Jefatura de Unidad Departamental de Amparos y Contenciosos.

ABTS\*d

Ahora, de conformidad con el numeral vigésimo, fracción III, del invocado Acuerdo General, deberá procederse a la destrucción del cuaderno duplicado, una vez que transcurra el plazo de seis meses.

Lo anterior, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero, párrafo segundo, conconitante con vigesimoquinto, párrafo primero del Acuerdo General en cita, este juzgado estima que no tiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar, debiendo realizar la anotación correspondiente en la carátula del sumario, así como en el libro de gobierno respectivo.

Por otra parte, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del código adjetivo referido de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele a la parte quejosa las documentales que en su caso, haya exhibido en copia certificada o copia simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que se encuentran a su disposición dichas documentales en el local de este juzgado a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan.

En consecuencia, se instruye a la secretaría encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia.

NOTIFIQUESE.

Así lo proveyó y firma Germán Cruz Silva, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido de la Secretaría Aída Gallardo Vara, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo, y el acuerdo mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. \*diana\*\*

"FIRMADO. DOS FIRMAS ILEGIBLES, UNA SOBRE EL NOMBRE DEL JUEZ Y OTRA SOBRE EL DEL SECRETARIO(A). RUBRICADO."

LO QUE COMUNICO A USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS

LEGALES PROCEDENTES.

CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEGOCHOSEIS

AIDA GALLARDO VARA



SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

MATERIA ADMINISTRATIVA  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

\*\*\*



RA-563/2017  
AMPARO EN REVISIÓN

QUEJOSA Y RECURRENTE:  
SUSANA GARCÍA CÁRDENAS

RECURRENTE ADHESIVO:  
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE  
GOBIERNO EN TLALPAN

MAGISTRADO PONENTE:  
JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ

SECRETARIO:  
OSCAR FLORES PATIÑO

Ciudad de México. Sentencia del Decimonoveno  
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer  
Circuito, correspondiente a la sesión de tres de agosto de  
dos mil dieciocho.

VISTOS;  
Y,  
RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de  
octubre de dos mil dieciséis, por [REDACTED]  
[REDACTED] por propio derecho, en la Oficina de  
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en  
Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitó el  
amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad  
y por los actos siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE:

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE  
GOBIERNO EN TLALPAN."

ACTO RECLAMADO:

A) Orden de demolición y desmantelamiento  
de mi vivienda.

**B)** *La inconstitucional orden de clausura y por ende la privación de la disposición de mi hogar.*

**C)** *Imposición de sanción económica o pecuniaria inusitada o excesiva.*

*Todo con motivo de la imposición de una pena fuera del procedimiento llevado a manera de juicio.”*

**SEGUNDO.** Del escrito de garantías correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien lo registró bajo el índice 1674/2016, y por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto del inmueble que por esta vía defiende, señalando su ubicación, coordenadas, colindancias, el uso de aprovechamiento de suelo para el que se encuentra autorizado, el destino y uso que se daba al inmueble; además para que manifestara si a su derecho convenía, señalar como acto reclamado la imposición de sellos de clausura que refería en su demanda de amparo, y en caso afirmativo, proporcionara los datos de dicha imposición de sellos e indicara la autoridad o autoridades a las que en forma específica les atribuía dicho acto.

Por escrito presentado en el juzgado de origen el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, la parte quejosa desahogó el requerimiento y precisó las coordenadas de la ubicación del inmueble que defiende, así como el uso actual del mismo, y en proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, admitió el escrito de garantías.

**TERCERO.** Mediante auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, el juzgado requirió a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo señalar como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes:

1) La resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del procedimiento de verificación administrativa TLP/D/SVRVA-CYE/0668/2016, emitida por el **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**.

2) La cédula de notificación por estrados de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por el citado **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**.

Requerimiento que se tuvo por desahogado mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciséis; asimismo, la quejosa promovió ampliación de demanda, por los actos mencionados en el párrafo que antecede y por las autoridades **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan y Notificador de la Delegación Tlalpan**, Margarito Cruz Juárez.

En proveído de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, admitió a trámite la ampliación de demanda, desistiéndose de dicha ampliación el trece de marzo de dos mil diecisiete y se decretó el sobreseimiento parcial en el juicio de amparo únicamente respecto de los actos materia de la citada ampliación; a saber:

1. La resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del procedimiento de verificación administrativa TLP/D/SVRVA-CYE/0668/2016, emitida por el **Director General Jurídico y de Gobierno de Tlalpan**.

2. La cédula de notificación por estrados de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por el **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**.

Por acuerdo de veinte de enero de dos mil diecisiete, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si a su interés convenía designar como nueva autoridad responsable a Tania Sánchez Guzmán, **Personal Especializado en Funciones de Verificación del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México**, pues se advertía su participación en la emisión de los actos reclamados.

Requerimiento que la parte quejosa desahogó en escrito de quince de febrero de dos mil diecisiete, en los siguientes términos:

**“...III. La autoridad o autoridades responsables...**

A) TANIA SÁNCHEZ GUZMÁN, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA DELEGACIÓN TLALPAN.”

**“IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame:**

A) La emisión del Acta de Clausura de fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, que implica la ejecución de la resolución administrativa emitida en el procedimiento administrativo TLP/DJ/SVRVA-CyE/0668/2016.”

El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por ampliada la demanda por la autoridad y acto mencionado en el párrafo anterior.

Asimismo, mediante curso presentado en el juzgado el diez de marzo de dos mil diecisiete, la parte quejosa promovió ampliación de demanda, respecto de los actos y autoridades responsables siguientes:

**“III. La autoridad o autoridades responsables...**

A) DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN.

B) J.U.D. DE RECURSOS NATURALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN.

C) DRA. CELIA OLIVER MORALES; PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN.

D) BIOL. ULISES PECH RIVERA, PERSONAL ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

E) DIRECTOR DE ESTUDIOS, DICTÁMENES Y PERITAJES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”

**“IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame:**

1. EL REPORTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL número 11-701-F/P-01 de fecha 14 de julio de 2016 [...]

2. ESTUDIO TÉCNICO, sin fecha de emisión [...]

3. DICTAMEN TÉCNICO, sin fecha de emisión, pero con número de folio PAOT-2016-956-SEPOT-570 [...]

4. LA EMISIÓN DEL OFICIO NÚMERO DT/DGMADS/1596/2016, de fecha 5 de septiembre del año 2016, por el que remite al Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan, los documentos detallados en los anteriores numerales [...].”

Ampliación que por auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, se desechó.

**CUARTO.** Seguidos los trámites correspondientes, el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete el Juez del conocimiento emitió sentencia, con el siguiente punto resolutivo:

**ÚNICO.** Se **SOBRESEE** en el presente juicio de amparo.

**QUINTO.** Inconforme con tal determinación, Susana García Cárdenas, interpuso recurso de revisión,

del que correspondió conocer a este tribunal colegiado, cuyo magistrado presidente, por auto **de siete de diciembre de dos mil diecisiete**, lo admitió y ordenó su registro con el expediente **R.A. 563/2017**.

**SEXTO.** El agente del Ministerio Público de la Federación fue notificado de la admisión del medio de defensa.

**SÉPTIMO.** Mediante auto de **diez de enero de dos mil dieciocho**, previo requerimiento, se admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**.

**OCTAVO.** En proveído de **diecinueve de enero de dos mil dieciocho**, se tuvieron por realizadas las manifestaciones de la parte quejosa, en relación con el amparo en revisión adhesivo.

**NOVENO.** Mediante proveído de presidencia de **veinticuatro de enero de dos mil dieciocho**, se turnó el expediente a la ponencia del Magistrado **José Eduardo Alvarado Ramírez**, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

**DÉCIMO.** Mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se hizo del conocimiento de las partes que la nueva integración de este órgano jurisdiccional es la siguiente: magistrado Salvador Mondragón Reyes, presidente, magistrado Hugo Guzmán López y magistrado José Eduardo Alvarado Ramírez; y,



## CONSIDERANDO:

**PRIMERO.** Este tribunal colegiado es competente para conocer de los recursos de revisión, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo, y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que se impugna una sentencia dictada en audiencia constitucional por una juez de distrito en materia administrativa que reside en el territorio en que este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

**SEGUNDO.** El recurso de revisión proviene de parte legítima, pues fue interpuesto por la quejosa afectada por la sentencia aquí recurrida, es decir, [REDACTED] a quien mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciséis -foja sesenta y ocho- dictado en el juicio de amparo, le fue reconocida la representación hoy ostenta.

Por su parte, el recurso de revisión adhesiva, también proviene de parte legítima, pues fue interpuesto por el apoderado general para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de México en Tlalpan en representación del **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**, autoridad responsable en el juicio de amparo del cual emana la sentencia aquí recurrida y a quien jurídicamente le beneficia; carácter que le fue reconocido por el juez de distrito mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciséis -foja trescientos trece de los autos del juicio de amparo-.

**TERCERO.** El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente ya que se hizo dentro del plazo de **diez días** previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, y en conformidad con el diverso artículo 19 de la ley de la materia y la circular **34/2017** emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Lo anterior se resume en los siguientes cuadros:

OCTUBRE 2017						
D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25 a)	26 b)	27	28
29	30	31				

NOVIEMBRE 2017						
D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10 c)	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- a) Fecha en que fue notificada la sentencia recurrida a la quejosa.
  - b) Fecha en que surtió efectos la notificación.
  - c) Día en que fue presentado el recurso de revisión principal.
- ☐ Plazo de diez días para interponer el medio de impugnación.

☐ Días inhábiles.



RA-563/2017

La interposición de la revisión adhesiva fue oportuna ya que se hizo dentro del plazo **cinco días** previsto en el artículo 82 de la legislación de la materia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia.

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:

DICIEMBRE 2017						
D	L	M	M	J	V	S
3	4	5	6	7	1 8 a) y b)	2 9
10	11	12	13	14	15 c)	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

a) Fecha en que fue notificado el auto de admisión del recurso principal.

b) Fecha en que surtió efectos la notificación.

c) Día en que fue presentado el recurso de revisión adhesiva.

☐ Plazo de cinco días para interponer el medio de impugnación.

☐ Días inhábiles.

**CUARTO.** Es procedente el recurso de revisión principal en términos de la fracción I, inciso e) del artículo 81 de la Ley de Amparo, en razón de que se interpone contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto.

Asimismo, resulta procedente el recurso de revisión adhesiva en términos del artículo 82 de la Ley de Amparo, en razón de que se sobreesyó en el juicio de amparo y el medio

de impugnación de que se trata lo opone **Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan**, en su carácter de autoridad responsable.

**QUINTO.** Con el proyecto listado para sesión se adjunta copia de la sentencia **recurrida** de la que, además, se agrega copia certificada al expediente, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su reproducción, así como la de los **agravios**; en atención a que la legislación de la materia en ninguno de sus preceptos lo establece como condición para resolver el **recurso de revisión**. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”**.

**SEXTO.** En el primer agravio la quejosa sostiene que la sentencia recurrida le causa perjuicio al señalar por un lado, un desistimiento de actos que no existió y por otro lado, estudiar los mismos para justificar la acción realizada por la autoridad responsable; razones por las que considera ilegal que la orden de demolición y desmantelamiento del inmueble así como la imposición de la sanción económica, no se tuvieran como actos reclamados derivado del desistimiento de la resolución administrativa de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, siendo que lo puesto en debate es la



omisión de ser oída y en su caso vencida en un procedimiento llevado en forma de juicio.

Agrega que el primero de los actos citados, le generaría mayor daño que la orden, acta e imposición de sellos de clausura, pues resultan menos gravosos que aquella; asimismo, destaca que no soslaya que se desistió de los actos reclamados consistentes en emisión y notificación de la resolución administrativa de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la cual implica la orden de demolición y desmantelamiento del inmueble.

Expone, que si el juez de distrito al momento de precisar los actos reclamados en el juicio de amparo (orden y acta de clausura de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente TLP/DJ/SV/RVA-CYE/06668/2016, así como la imposición de sellos relativos), también tomó en consideración aquellos por los que se desistió; consecuentemente, debió determinar cual representa un mayor perjuicio al gobernado, y hecho lo anterior, estudiar su constitucionalidad.

Ello, pues tal precisión debió realizarse con base en aquellos actos que le causan mayor daño a su esfera jurídica, pues al evitar la producción del acto en extremo gravoso, prevalecería la norma que represente una mayor protección a su persona.

Afirma que el juez de distrito omitió analizar el argumento que genera la violación a su esfera jurídica, consistente en la transgresión a los derechos de legalidad y debido proceso.

Expuesto lo anterior, debe tenerse presente el contenido del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente:

***“Artículo 74. La sentencia debe contener:***

***I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;***

***(...)”***

Esto es, la sentencia de amparo deberá contener una fijación clara y precisa del acto reclamado.

En ese orden de ideas, se tiene que con el objeto de lograr una determinación clara y precisa del acto reclamado, debe acudirse a la lectura íntegra del escrito de demanda por lo que los juzgadores estarán facultados para interpretar el sentido de la demanda a fin de que la resolución que corresponda recaiga sobre el exacto reclamo del gobernado, y en correspondencia con su intención real.

Es decir, el juzgador de amparo, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no a lo que aparentemente dijo pues sólo de esta manera es posible lograr el sentido de congruencia que debe existir en la sentencia entre lo pretendido y lo resuelto.

Expuesto lo anterior, debe darse noticia que la quejosa mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil diecisiete, ante el juzgado distrito, solicitó el desistimiento de los siguientes actos reclamados:

***“A. La emisión de la inconstitucional resolución administrativa de fecha 27 de septiembre del años dos mil dieciséis, que implica la orden de demolición y desmantelamiento de mi vivienda.***

***B. La notificación por cédula, de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis.”***

Cabe precisar, que del contenido de dicha resolución administrativa, se advierte que en sus resolutivos se hace alusión a una sanción económica así como a una orden de demolición, entre otras determinaciones, como lo son la clausura total de la construcción así como la imposición de sellos relativos.

Posteriormente, mediante comparecencia de diez de marzo de dos mil diecisiete, la quejosa ratificó el contenido y firma del memorial aludido; por lo que por auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento parcial en el juicio de amparo únicamente respecto a dichos actos.

Por su parte, el juez de distrito en el segundo considerando de la sentencia reclamada sostuvo lo siguiente:

***“(…) SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo conforme al contenido de los escritos de demanda y de ampliación, de la siguiente manera:***

***1.- La orden de clausura para construcciones de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente TLP/DJ/SVRA/A-CyE/0668/2016. en contra del inmueble denominado ‘***

***2.- La emisión del acta de clausura de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el***

procedimiento de verificación en materia de construcciones TLP/DJ/SVRVA-CYE/0668/2016.

3.- La imposición de sellos de clausura en el inmueble que defiende la parte quejosa.

No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la parte quejosa haya señalado como actos reclamados en su escrito inicial de demanda y escrito de ampliación de siete de diciembre de dos mil dieciséis, la orden de demolición y desmantelamiento del inmueble que defiende, la imposición de sanción económica o pecuniaria decretada en su contra, la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis dictada en el citado procedimiento, así como la cédula de notificación de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, toda vez que al desistirse del juicio respecto de la citada resolución administrativa y su notificación, mediante escrito de **tres de marzo de dos mil diecisiete** (fojas 841 a 842), también lo hizo respecto de la orden de demolición y desmantelamiento del inmueble que defiende, y de la imposición de sanción económica o pecuniaria decretada en su contra, que en la citada resolución se contienen.  
(...)"

Esto es, como se ve el desistimiento a que alude la quejosa sí existió, a saber, de la resolución administrativa de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, donde la propia Susana García Cárdenas, destacó la orden de demolición y desmantelamiento del inmueble que defiende.

Asimismo, se advierte que el juez de distrito de modo alguno incurrió en incongruencia alguna, ya que no integró a la litis constitucional los actos reclamados por los que se desistió la quejosa, sino por el contrario, al determinar la materia del sumario constitucional, indicó que aquellos no serían materia de análisis de la sentencia relativa derivado de la voluntad manifiesta de la hoy recurrente.

En ese sentido, los actos que fueron materia de ese abandono de la acción de amparo, no podían ser



15

RA-563/2017

considerados en la resolución materia del presente recurso, ni siquiera por las consideraciones ahora apuntadas por la quejosa, es decir, que le generan mayor perjuicio los actos desistidos que los que finalmente constituyeron la materia del juicio biinstantial; de ahí lo **infundado** del agravio en estudio.

En el **segundo agravio**, refiere que le causa perjuicio el que el juez sostuviera que no acreditó el interés jurídico.

Indica que se le obligó a acreditar una situación a la cual no estaba obligada, al sostenerse que la orden de visita de verificación tiene el objeto de constatar que las construcciones en el suelo de conservación, cuenten con la licencia de construcción especial y cumpla con las disposiciones del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, exigiéndose en particular que cuente con licencia de construcción especial que le permita construir, ampliar, remodelar, modificar, reparar, demoler o dismantelar una obra o instalación, ya que la responsable debió establecer la hipótesis en la cual se encuadró la quejosa esto es, ¿Qué se construyó?, ¿Qué construcción se amplió?, ¿Qué construcción se modificó, reparó o demolió? y de ahí justificar que efectivamente era sujeto obligado a exhibir dicho documento.

No obstante, refiere que del acta de visita de verificación se advierte que el verificador jamás señaló que se haya construido, ampliado, modificado o reparado alguna construcción, por lo que resulta contrario a derecho que el juez de distrito haya señalado que la quejosa tendría la obligación de exhibir una supuesta licencia especial, siendo

que el motivo del amparo fue respetar el derecho de audiencia y debido proceso.

Que el juzgador confunde conductas como lo son las de levantar y omitir edificaciones, con las de habitar u ocupar un determinado inmueble, siendo conceptos totalmente distintos, por lo que colige que si el juez no estableció de manera fehaciente que se estuviera levantando una edificación y que por tal acción, fuera obligatorio contar con determinado documento, no es factible que para otorgarle el amparo se le exija una licencia de construcción especial si no se acreditó la acción imputada.

Agrega que la autoridad es omisa en precisar el por qué pese a que no se está construyendo, debe acreditarse la autorización expresa, si es clara en establecer que la actividad regulada y por lo tanto de orden público e interés social lo es la edificación de una obra (tiempo presente), acción diversa a la ocupación o habitación de la misma, máxime que la propia juzgadora establece que las acciones de construir ampliar, remodelar, modificar, reparar, demoler o dismantelar una obra o instalación, son aquellas que a su ejecución deben contar con la licencia de construcción.

Que del estudio de las constancias que obran en autos, no existe documental alguna donde se acredite que estuviera realizando alguna de las acciones referidas, concretamente en el acta de visita de verificación de once de octubre (sic) de dos mil dieciséis.

Que en ningún momento se valoraron todas las pruebas aportadas, en específico el Certificado de

Zonificación de Uso de Suelo de folio 21198-151GASU17, de tres de mayo de dos mil diecisiete, el cual permite determinadas actividades; constancia que junto con el contrato privado de cesión de derechos posesorios, estima, acreditan su interés legítimo, dada la creación del vínculo que tiene con el inmueble y por ende, el derecho real sobre el mismo.

Agrega que dicho contrato es de fecha cierta, por lo que al demostrarse la existencia del contrato traslativo de dominio, y con ello el derecho subjetivo existente y afectado mediante el acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés legítimo, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad solo tienen efectos declarativos.

Expuesto lo anterior, se tiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho subjetivo, es decir, un derecho reconocido por la ley que confiere una facultad o potestad de exigir a otro una determinada conducta que puede consistir en dar, hacer o no hacer.

Además, de diversos criterios emitidos por el propio Supremo Tribunal del país, se advierte que la figura del interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues supone un derecho legítimamente tutelado, y derivado de su transgresión por parte de alguna autoridad o ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional federal, para demandar el cese de esa transgresión.

Es así, que por perjuicio debe entenderse todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos en forma tal, que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), con registro 2004501, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página: 1854, cuyo contenido es el siguiente:

**“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.** El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, “teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo”, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad.

Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente."

También cobra aplicación, la tesis aislada P. XIV/2011, con registro 161286, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página: 34, cuyo rubro y texto son los siguientes:

**"INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material".

En relación con los actos de naturaleza administrativa, debe tenerse en consideración que quien aduce un interés jurídico en sentido estricto, parte de que una norma general se ha individualizado en su beneficio de tal forma que cuenta con un derecho subjetivo, mientras que quien ostenta interés legítimo aduce la existencia de una norma que aún no se ha individualizado en su beneficio, pues simplemente lo coloca, como integrante de una colectividad, en la posibilidad de defender, en su beneficio.

Es así que en el asunto a estudio, la exigencia del interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo a efecto de que el gobernado pretenda obtener sentencia que le reconozca realizar actividades reguladas, responde a la necesidad de establecer mecanismos que permitan corroborar que quienes reclamen el respeto de un derecho objetivo efectivamente sean titulares de éste; es decir, el interés jurídico determina una posición distinta frente al orden jurídico, que aquélla que tiene quien acude a juicio con un interés legítimo que defender.

De ahí que tratándose de actividades reguladas o regladas por la ley, para cuyo ejercicio se requiere de una autorización, licencia, permiso o aviso ante la autoridad administrativa, la facultad de exigir requiere de la existencia de un derecho que necesariamente debe acreditarse en juicio.

Tal permiso (autorización, licencia o aviso) constituye la base del derecho subjetivo que se defiende en juicio y, por ello, es menester que se acredite con documento idóneo, para la procedencia del estudio del fondo del asunto, pues



21

RA-563/2017

cuando la pretensión del quejoso consiste en la obtención de una sentencia que le permita continuar realizando actividades reguladas, la ley condicionó la posibilidad del estudio de ese acto a la existencia de la documentación concerniente a la concesión, licencia, permiso, autorización o aviso.

Por su parte, el juez de distrito sobreesó en el juicio derivado de que la sala responsable una vez que determinó que la ahí actora no acreditó su interés jurídico para controvertir la resolución administrativa en atención a que no exhibió documento alguno, con el que demostrara ser titular del derecho que considera transgredido, es decir, no exhibió la licencia de construcción especial para suelo de conservación que establece el artículo 57, fracción I, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que establece la necesidad de contar con una licencia de construcción especial para levantar edificaciones en suelos de conservación, como en el caso lo es el suelo en que se encuentra la vivienda que defiende la quejosa, según lo manifestado en su escrito aclaratorio presentado en este juzgado el ocho de noviembre de dos mil dieciséis bajo el número de folio 21427.

Agregó que de las constancias de autos se advertía que la imposición de sellos deriva de la visita de verificación en materia de construcciones y edificaciones de diez de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo TLP/DJ/SVR/VA-CYE/0668/2016, cuyo objeto fue constatar que las construcciones en suelo de conservación contaran con la licencia de construcción especial y cumplieran con las disposiciones del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás

ordenamientos jurídicos aplicables referentes a obras o instalaciones que se encuentren en el predio de referencia, exigiéndose en particular que el visitado contara con licencia de construcción especial que le permita construir, ampliar, modificar, reparar, demoler o dismantelar una obra o instalación.

Indicó que con posterioridad se dictó una la resolución que concluyó el citado procedimiento -acto que no formó parte de la litis de dicho sumario constitucional-, en la que se impuso una multa consistente en el 5% del valor de la construcción al propietario y/o poseedor y/o encargado de la construcción correspondiente, precisamente por no contar la hoy agravada con la licencia especial de construcción , como lo establece el artículo 57, fracción I, del citado Reglamento, porque la construcción referida se ubica en suelo de conservación, de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Vigente. De igual modo, se ordenó la clausura y la demolición total de la construcción ubicada en [REDACTED]

Del mismo modo destacó que toda actividad regulada, es de orden público e interés social como lo es la edificación de una obra, por lo que se requiere de autorización expresa por parte de la autoridad para su realización; motivo por el que enfatizó que correspondía a la quejosa demostrar que las construcciones que se advirtieron en la verificación, aun cuando no se estuvieran ejecutando, se encontraban amparadas, para así, estar en aptitud de reclamar la inconstitucionalidad de los actos administrativos que pretendió, pues de lo contrario, carece de un derecho o facultad protegido por la ley.



Concluyó que al no demostrar que contaba con la licencia de construcción especial sobre el inmueble que por esa vía defendió, como lo prevé el numeral mencionado, siendo que fue objeto de visita de la autoridad administrativa sin que fuera exhibido, carecía de interés jurídico y legítimo para acudir al juicio de amparo a combatir la orden y acta de clausura, e imposición de sellos en el inmueble que defiende; asimismo, puntualizó que no soslayaba el contenido de la copia certificada del contrato privado de cesión de derechos posesorios que exhibió la quejosa, sin embargo, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, es claro prever que el interés jurídico, en estos casos, se acredita con la multicitada licencia especial de construcción, motivo por el que al demostrarse tal interés, debía sobreseerse en el juicio de amparo de conformidad con la fracción XII del numeral 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo.

En ese orden, resulta infundada la afirmación de la quejosa consistente en que **sí acreditó su interés jurídico; que se tuvo que demostrar en qué hipótesis se encontraba (construcción, ampliación, remodelación, modificación, reparación, demolición o desmantelación de una obra o instalación)** así como analizar el contenido de la misma.

Ello es así, pues como se vio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que si el actor no cuenta con la correspondiente concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, que permitiera realizar actividades reguladas por el gobierno local, no pueden analizarse los actos reclamados,

ya que sólo pueden ser controvertidos por quien cuente con la documentación que demuestre su interés jurídico.

Es decir, al no demostrarse que se contaba con el permiso para realizar una actividad reglada, únicamente se podía controvertir la sanción económica determinada, pues con ésta se causa un perjuicio al accionante, la cual debe ser combatida de forma directa, controvertiendo los vicios propios que de ella se deriven, es decir, corroborar que se citaron los hechos que la actualizan y que éstos coincidan con lo asentado por el verificador, de manera que exista congruencia entre lo apreciado por este último y las hipótesis legales que contiene el precepto que se cita.

Consecuentemente, se considera que en la sentencia recurrida no se incurrió en la omisión destacada en el agravio en estudio pues el contrato privado de cesión de derechos posesorios fue desestimado y por otro lado, si bien no se pronunció en relación con el certificado Único de Zonificación de uso de suelo; ello no es óbice en relación con el sentido del fallo recurrido, pues como se dijo dicho documento no es el idóneo para acreditar la legalidad de la actividad realizada, es decir, el interés jurídico.

Por lo que aceptar que eran suficientes dichas constancias para demostrar el interés jurídico respecto de la orden, acta y sellos de clausura con independencia del interés jurídico que exige la ley en relación con actividades reguladas (que requieren de autorización por parte de la autoridad), rompería con la naturaleza de las mismas.



Así, el quejoso sí estaba obligado a acreditar su interés jurídico en el juicio con la licencia de construcción especial para levantar edificaciones en suelos de conservación, pues se insiste, para poder controvertir los actos aludidos, la quejosa debió acreditar que no se necesitaba ese tipo específico de autorización para realizar dichos trabajos al demostrar cual le fue otorgado al respecto o bien, que poseía la misma para así demostrar su interés jurídico.

En mérito de las consideraciones que anteceden y al haberse desestimado los agravios de la quejosa, lo que se impone es confirmar la sentencia recurrida.

**SÉPTIMO.** En razón de lo resuelto en el considerando anterior, ante lo infundado del recurso de revisión principal debe declararse sin materia la revisión adhesiva interpuesta por la autoridad responsable.

Al respecto, es aplicable lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J.166/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 552, de rubro: “**REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA.**”

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.** Se **CONFIRMA** la sentencia recurrida.

**SEGUNDO.** Se **SOBRESEE** en el juicio de amparo, promovido por **SUSANA GARCÍA CÁRDENAS**.

**TERCERO.** Se declara **SIN MATERIA** la revisión adhesiva.

**NOTIFÍQUESE;** con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido, el cual es susceptible de **destrucción**, conforme a lo que se establece en el Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diciembre 2012.

Así, lo resolvió el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados, **Salvador Mondragón Reyes (presidente), Hugo Guzmán López y José Eduardo Alvarado Ramírez**, siendo ponente el último de los nombrados.

En conformidad con el artículo 188 de la Ley de Amparo, firman los magistrados ante la secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

**FIRMAS Y RÚBRICAS**